



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

## MEMORIA DE IDONEIDAD DEL ENCARGO “APOYO TÉCNICO A LOS TRABAJOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, DEL REGISTRO EMAS Y DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA”

### 1. ANTECEDENTES

La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, de conformidad con el Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, es el órgano competente en la Comunidad de Madrid para tramitar diferentes procedimientos ambientales, entre otros, los relativos a las autorizaciones ambientales integradas derivadas de la normativa de prevención y control integrados de la contaminación.

Desde el Área de Control Integrado de la Contaminación, adscrita a esta Dirección General se gestionan los expedientes relacionados con ese procedimiento.

Esta Dirección General debe estar en situación de dar respuesta a la tramitación de las modificaciones y las revisiones de las autorizaciones ambientales integradas concedidas a instalaciones potencialmente contaminantes de acuerdo a la publicación de la normativa estatal y de la unión europea de aplicación, en concreto, y relación con esta última, de las Decisiones de la Comisión Europea relativas a las Conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) de los distintos sectores industriales, que son de aplicación directa y de obligado cumplimiento en un plazo de cuatro años desde su publicación, y de la adaptación según su régimen transitorio a la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024 por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos, y que entró en vigor el 4 de agosto de 2024. También debe dar respuesta a la tramitación del registro voluntario de operadores al Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS) y Etiqueta Ecológica.

Para la aplicación de la citada legislación, se requiere la mejora técnica continua en el conocimiento de los procesos industriales y de la normativa de referencia. Por tanto, se ha estimado conveniente arbitrar soluciones que vengan a dar una respuesta ágil y eficiente. Por ello, para la tramitación de estos procedimientos, es necesario una gran especialización y conocimiento de muchos procesos industriales que pueden resultar cambiantes, y es necesario contar con la colaboración de expertos en la materia para su satisfactoria resolución.

La unidad administrativa denominada Área de Control Integrado de la Contaminación de la Subdirección General de Impacto Ambiental, realiza las siguientes funciones:

- a) Tramitación de procedimientos administrativos para la emisión de resoluciones de autorizaciones ambientales integradas (AAI), de instalaciones potencialmente contaminantes que integran autorizaciones, informes o dictámenes de normativa

ambiental sectorial (atmósfera, vertidos, atmósfera, residuos, etc.), así como las modificaciones y revisiones de las autorizaciones concedidas.

- b) En su caso, la coordinación con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
- c) Participación y colaboración en la labor inspectora de este tipo de instalaciones.
- d) Emisión de informes relativos a consultas sobre la normativa de prevención y control integrados de la contaminación.
- e) Inscripción de organizaciones en el Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS), actualización y renovación.
- f) Concesión de Etiqueta Ecológica a productos.

Por otra parte, hay que añadir la publicación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se reduce los plazos de tramitación sin simplificar sus distintos trámites administrativos del procedimiento de solicitud de AAI, modificación o revisión. También ha publicado el Decreto 15/2023, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid. Ambas Normas implican dar una respuesta más ágil a las tramitaciones y de forma indirecta una mayor carga de trabajo de la que ya existía.

## **2. RAZONES DE URGENCIA O NECESIDAD QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD DEL ENCARGO**

Para las labores señaladas, en el Área de Control Integrado de la Contaminación dispone de escasos recursos. Entre las instalaciones cuya autorización y seguimiento corresponde a esta Área se encuentran algunas de gran importancia económica para la Comunidad de Madrid y con repercusión social y mediática, y sobre las que Fiscalía, Defensor del Pueblo, organizaciones sociales y ecologistas, Ayuntamientos y ciudadanos solicitan muy frecuentemente información con relación a su estado de actividad, emisiones al medio ambiente, inspecciones realizadas, procedimientos sancionadores, etc. Esto implica que cada técnico del área debe estar permanentemente pendiente del buen funcionamiento de cada una de las instalaciones que gestiona, independientemente de los nuevos entrantes que se van produciendo, lo que supone que la carga de trabajo es siempre acumulativa.

Entre estas instalaciones se encuentran la incineradora de Valdemingómez (UTE LAS LOMAS), la cementera de Morata de Tajuña (CEMENTOS PORTLAND, S.A.), la central de cogeneración que garantiza el suministro energético, en servicio continuo, al Nuevo Área Terminal (NAT) del Aeropuerto Madrid-Barajas (SAMPOL), las Mancomunidades de Pinto, Noroeste, Este (todas ellas vertederos de RSU municipales), el vertedero de Alcalá de Henares, etc.

La carga de trabajo actualmente existente en el Área llega a implicar retrasos en la tramitación de los expedientes administrativos, que superan el plazo que la normativa impone a la Administración, con toda la problemática económica y legal que puede suponer y un desfase importante en la emisión de informes derivados de la normativa anteriormente mencionada,

Además de todas las dificultades mencionadas, la normativa ambiental incorpora muy frecuentemente nuevas exigencias que redundan en incrementar la carga de trabajo del Área y, por tanto, en agravar el problema existente.

De hecho desde el año 2017 y siguientes, de acuerdo a las exigencias marcadas por la normativa y una vez publicadas las Decisiones Europeas sobre las mejores técnicas disponibles aplicables a los sectores incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa de prevención y control integrado de la contaminación, es necesario añadir a las tareas que actualmente se realizan en el Área, la revisión de las autorizaciones otorgadas, lo que implica la comprobación de la adecuación de las instalaciones a las técnicas publicadas para que estas instalaciones puedan seguir operando en la Comunidad de Madrid.

A esos cambios hay que añadir la publicación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y del Decreto 15/2023, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno, ya mencionados al final del apartado 1, que reducen los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos indicados, aumentando también la carga de trabajo sin aumentar los recursos personales.

También, hay que dar respuesta adecuada a los proyectos que requieran autorización ambiental integrada y que hayan sido declarados como estratégicos para la Comunidad de Madrid en aplicación del Decreto 15/2023, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid.

Se hace, por tanto, totalmente imprescindible y urgente la autorización del presente encargo a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) al disponer de personal técnico especializado y multidisciplinar para realizar las tareas objeto de los trabajos de este encargo, siendo más eficiente esta opción que la contratación pública, ya que la espera de un concurso público demora en exceso la respuesta a las distintas solicitudes que se presentan, y redundará en la mejora del exigible cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la Administración (con todo lo que ello conlleva de seguridad jurídica para los funcionarios), y supondrá un beneficio tanto económico como ambiental para los ciudadanos de esta Comunidad.

El encargo se encuadra dentro del marco establecido por la Disposición adicional vigésima cuarta y las disposiciones concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se realiza, como se ha indicado, por razones de eficiencia y urgencia, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de conformidad con el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Este encargo por la insuficiencia de medios del órgano administrativo para desarrollar los trabajos con su propio personal resulta imprescindible el apoyo material en las distintas funciones que esta Área desempeña.

En ningún caso se trata de la tramitación de los procedimientos administrativos, en cuanto constituyen la actividad indispensable, técnica y ordinaria de las Administraciones que queda reservada para los funcionarios públicos.

La valoración del encargo se ha confeccionado de acuerdo con la Resolución de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA, con el que se aprueban las tarifas 2024 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Madrid, a fecha de la firma

JEFA DE ÁREA DE CONTROL  
INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN,

SUBDIRECTORA GENERAL  
DE IMPACTO AMBIENTAL,

Firmado digitalmente por: GARROTE GARCIA EVA MARIA  
Fecha: 2025.02.18 16:39

Firmado digitalmente por: IZQUIERDO SANZ ALICIA  
Fecha: 2025.02.19 09:15